



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADO SUSTANCIADOR
MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Medellín D.E. de C., T., e I. ¹, catorce de marzo de dos mil veintitrés

Radicación n°.	05001 22 03 000 2023 00100 00
Proceso.	Conflicto - Ejecutivo
Demandante.	Ángela María Vélez Correa
Demandado.	Federman Guisao Sepúlveda
Procedencia.	Juzgados Veintiocho Civil Municipal de Medellín y Quinto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Medellín
Decisión.	Dirime conflicto. Asigna competencia al Juzgado Quinto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Medellín.
Tema.	Factores de competencia. Competencia para conocer de la ejecución presentado por acreedor hipotecario citado en proceso ejecutivo.
Rdo. interno.	012-23
Interlocutorio No.	055-23

I. ASUNTO A RESOLVER

Procede el Despacho a resolver el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Veintiocho Civil Municipal de Oralidad de Medellín y el Juzgado Quinto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Medellín, respecto del proceso ejecutivo adelantado por Ángela María Vélez Correa para la efectividad de la garantía real, constituida a su favor, en contra de Federman Guisao Sepúlveda.

II. ANTECEDENTES

Ángela María Vélez Correa presentó demanda ejecutiva en contra de Federman Guisao Sepúlveda, para la efectividad de la garantía real contenida en la Escritura Pública 2.920 del 30 de mayo de 2014, de la Notaría 19 del Círculo de

¹ Acto Legislativo 01 de 2021, art. 1°. “La ciudad de Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.”

Medellín, dado el incumplimiento del deudor en el pago de la obligación en la forma acordada.

Dicha demanda le fue repartida al Juzgado Veintiocho Civil Municipal de Medellín, quien, mediante auto del 10 de agosto de 2022, rechazó la misma y dispuso su remisión al Juzgado Quinto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Medellín, al considerar que éste era el competente para conocer inicialmente la demanda, en razón de que en el proceso ejecutivo radicado con el No. 2019-0012, que allí se tramitaba, se había citado a Ángela María Vélez Correa, en su condición de acreedora hipotecaria del ejecutado, el 2 de abril de 2019, por lo que nada impedía que se tuviera notificada por conducta concluyente dentro de dicho asunto con la remisión de la demanda de ejecución formulada por la misma, para que, una vez surtida dicha notificación, la acreedora hipotecaria, dentro término de veinte (20) días, procediera a ratificar si formulaba demanda en proceso separado, o para que, hasta antes de ser fijada la primera fecha para remate, demandara dentro del mismo proceso en que se le está convocando.

Recibida la demanda por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Medellín, éste, mediante auto del 18 de enero de los corrientes, se rehusó a avocar el conocimiento de la misma, indicando que no se trataba de una acumulación al proceso adelantado ante ese Juzgado, contra el mismo demandado, por lo que el despacho judicial al que se le había repartido no tenía ningún fundamento para rechazarla y, en consecuencia, planteó el conflicto negativo de competencia, ordenando la remisión del proceso a esta Corporación para que fuera dirimido.

III. CONSIDERACIONES

1.- Competencia para dirimir el conflicto. Este Despacho es competente para conocer y decidir del presente conflicto por ser el superior funcional de los dos juzgados en conflicto, conforme lo establecido en el precepto 139 del Código General del Proceso, ya que ambos son de especialidad civil, de igual categoría, esto es, municipal y pertenecientes al distrito judicial de Medellín, siendo uno de ellos de ejecución de sentencias.

2.- De la competencia. Es la aptitud legal que distribuye el conocimiento de los diferentes procesos en los distintos órganos judiciales, para lo cual se tienen

en cuenta los factores *subjetivo*, que alude a una calidad especial de las partes; el *objetivo*, que se refiere a la naturaleza del asunto y a su cuantía; el *territorial*, que hace referencia al domicilio, lugar de ubicación de los bienes objeto de la demanda, entre otros; el de *conexión*, en razón del cual se permite acumular pretensiones que son competencia de diferentes jueces, en los casos que expresamente lo contemple la ley; y el *funcional*, que tiene en consideración la categoría y jerarquía de los funcionarios, para que se cumpla con la doble instancia, además de la etapa en la que se encuentra el proceso, o cuando se mira la función cualificada de ciertos órganos jurisdiccionales.

Con relación a la conexión, se ha establecido que no es un factor propiamente dicho para determinar competencia, si no que la altera o una modalidad de desplazamiento de aquélla, pues permite que en casos particulares un pleito específico pueda ser conocido por un juez diferente al que inicialmente debería avocar dicho conocimiento, en atención a los criterios generales. El fundamento que tiene esta consagración, mayormente radica en la economía procesal y eficacia en el ejercicio de la administración de justicia.

Ahora, el artículo 28 del Estatuto Procesal Civil establece una serie de reglas que dan lugar a los llamados foros o fueros que determinan el sitio (competencia territorial), donde puede el ciudadano demandar o ser demandado y obtener el reconocimiento y la declaración judicial de sus derechos o la ejecución de los mismos; los aludidos foros, que aplican exclusivamente alrededor del factor territorial, por expresa disposición legal y en atención a las circunstancias propias, operan de **manera privativa**, en caso de que se imponga repeliendo cualquier otro, o **concurrente**, cuando, por el contrario, coinciden con otro u otros sucesivamente, es decir uno a falta de otro, o por elección si se autoriza al actor para elegir entre varias opciones que la ley señala.

3.- De los conflictos de competencia. Ahora, previendo el legislador que, no obstante, las reglas de competencia establecidas, el actor pudiese formular la demanda ante el juez que no fuera competente, en el artículo 139 del Código General del Proceso, facultó a dicho funcionario judicial para que declarara su falta de competencia y lo remitiera al que estima tiene la aptitud legal.

Ahora, si el operador jurídico que reciba el asunto en razón de la asignación hecha por otro funcionario, se considera igualmente incompetente para avocar su

conocimiento, la misma preceptiva le confiere la posibilidad de que proponga conflicto negativo de competencia, para que sea dirimido por el superior funcional común, siempre que el asunto no le haya sido remitido a éste último por quien ostente la calidad de superior funcional.

Dicho conflicto debe ser resuelto de plano, ordenándose en la respectiva providencia remitir el asunto al juez que deba tramitarlo, la cual carece de recursos.

4.- Caso concreto. Se formuló demanda ejecutiva para la efectividad de la garantía real, ante los jueces civiles municipales de Medellín; sin embargo, el juzgado Veintiocho Civil Municipal de Medellín, al que le fue repartida, consideró que la misma debía ser conocida por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Ejecución de la misma localidad, por estarse tramitando ante el mismo el proceso ejecutivo dentro del cual, la demandante en la referida demanda, había sido citada como acreedora hipotecaria.

Al respecto establece el artículo 462 del Código General del Proceso:

*“Si del certificado de la oficina de registro correspondiente aparece que sobre los bienes embargados existen garantías prendarias o hipotecarias, el juez ordenará notificar a los respectivos acreedores, cuyos créditos se harán exigibles sino lo fueren, **para que los hagan valer ante el mismo juez**, bien sea en proceso separado o en el que se les cita, dentro de los veinte (20) días siguientes a la su notificación personal. Si dentro del proceso en que se hace la citación alguno de los acreedores formula demanda que sea de competencia de un juez de superior categoría, se le remitirá el expediente para que continúe el trámite del proceso.”* (Resalto intencional).

“Si vencido el término a que se refiere el inciso anterior, el acreedor notificado no hubiere instaurado alguna de las demandas ejecutivas, sólo podrá hacer valer sus derechos en el proceso al que fue citado, dentro del plazo señalado en el artículo siguiente.”

Es así que, en atención a la preceptiva que viene de señalarse, y conforme se evidenció por el Juzgado Veintiocho Civil Municipal de Medellín, de las actuaciones del proceso ejecutivo radicado con el No. 2019-00012, que cursa ante el Juzgado Quinto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Medellín, éste

citó a Ángela María Vélez Correa, en dichos términos, esto es, para que procediera a hacer efectiva la garantía hipotecaria que figuraba registrada a su favor en el certificado de tradición y libertad del inmueble propiedad del demandado, mediante auto del 2 de abril de 2019.

Ahora, la norma que viene de transcribirse le confiere al acreedor hipotecario que es citado dentro de un proceso ejecutivo donde se persigue el bien gravado con esa garantía real, un término para que formule demanda en la que haga valer dicho gravamen, esto es, para que ejecute la obligación garantizada con hipoteca, pudiendo optar por hacerlo dentro del mismo proceso en el que es citado, o en proceso separado, pero **siempre ante el mismo juez que lo citó**; y vencido dicho plazo, le impone la obligación de hacerlo únicamente dentro de aquél, es decir, dentro de la ejecución en que fue citado y hasta antes de que se emita auto fijando la primera fecha para remate o la terminación del proceso, conforme lo establecido en el inciso 1° del precepto 463 del Código General del Proceso².

No obstante, de la consulta realizada en la página web, conforme a la constancia que antecede, respecto de las actuaciones del proceso ejecutivo con radicado 2019-00012, que se tramita en el Juzgado Quinto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Medellín, pudo evidenciarse que Ángela María Vélez Correa, acreedora hipotecaria, a pesar de haber sido citada, como viene de indicarse, no había sido notificada personalmente de esta decisión, sometió la demanda para la efectividad de la garantía real a reparto, atendiendo las reglas generales que se contemplan para dichos efectos, y no hizo alusión a la citación que se le había hecho en dicho proceso en la demanda, como lo señala el inciso final del numeral 1° del artículo 468 del Código General del Proceso, razón por la cual se le asignó al Juzgado Veintiocho Civil Municipal de Medellín, quien del estudio del certificado de tradición y libertad del inmueble gravado con hipoteca y de la consulta de las actuaciones en el proceso, evidenció la existencia de la ejecución que se adelantaba en el juzgado de ejecución mencionado, por lo que decidió remitirlo al mismo para que se avocara su conocimiento.

Nótese, además, que como para la fecha en que fue formulada la demanda ejecutiva para la efectividad de la garantía real, por Ángela María Vélez Correa, aún ésta no había sido notificada de la citación que se le había hecho dentro del

² Por remisión expresa del inciso 2° del artículo 462 del Código General del Proceso.

proceso 2019-00012, el término de veinte (20) días que le otorga el artículo 462 del Código General del Proceso, para que optara por presentar su ejecución en proceso separado, ni siquiera había empezado a contabilizarse, y por ende, dicha prerrogativa se mantenía, teniendo la acreedora hipotecaria la facultad de formularla de esa manera, pero se insiste, ante el mismo juez que la citó conforme lo preceptúa el artículo 462 del Código General del Proceso, que contrario a lo señalado por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Medellín, es aplicable al caso concreto, en razón de que dicha norma regula la citación de acreedores con garantía real y establece la forma y el funcionario ante quién debe presentarse la demanda en la que pretendan hacer valer dicha garantía.

Sobre el tema, explicó el doctrinante JAIME AZULUA CAMACHO, en su obra *“MANUAL DE DERECHO PROCESAL. Tomo IV. Procesos Ejecutivos”* (2017):

“El acreedor hipotecario citado al proceso dispone de dos medios para hacer efectivo su crédito:

A) Comparecer o intervenir en el proceso ejecutivo en que se le cita, para lo cual dispone de la misma oportunidad señalada para la acumulación de demandas, esto es, ‘hasta antes del auto que fije la primera fecha para el remate de bienes, o la terminación del proceso por cualquier causa’ (C.G.P., art. 462 en conc., art. 463 ibídem).” (...)

“B) Instaurar su propia ejecución, limitada al proceso ejecutivo con título hipotecario o prendario, para lo cual dispone de veinte días contados a partir de la citación personal (C.G.P., art. 462, inc. 1°).

Varias secuelas se desprenden de esta disposición...

Aunque el aspecto mencionado atañe a cuestiones generales y, por tanto, de aplicación en todos los procesos, ..., por lo que podríamos abstenernos de considerarlas, se impone hacer referencia a ellas por las secuelas que se derivan, ...

*‘...la competencia para la ejecución con título hipotecario instaurada por el acreedor con garantía real radica **en el mismo juez que ordena citarlo personalmente**, de conformidad con lo preceptuado por el inciso 1° del artículo 62*

del Código General del Proceso, en lo que constituye una modificación al criterio acogido por el artículo 539 del Código de Procedimiento Civil, que guardó silencio a este aspecto, por lo cual había que seguir las reglas generales de competencia.”

Así las cosas, tenemos que en este caso opera una competencia por conexión, pues si bien en principio la demanda para la efectividad de una garantía debe someterse a las reglas generales de reparto, pudiendo corresponderle a cualquier juez de la categoría y municipalidad que se deriven del análisis de los respectivos factores, en este caso específico, esto es, cuando el acreedor a favor de quien fue constituida esa garantía es citado en proceso ejecutivo que se esté adelantando, por expresa disposición artículo 462 del Código General del Proceso, debe presentar la demanda ante el juzgado que dispuso la citación o, si la competencia funcional cambió, por la etapa en que se encuentra la actuación, ante la actual dependencia que conoce del proceso.

CONCLUSIÓN.

Corolario con lo expuesto, la competencia para conocer de la demanda formulada por Ángela María Vélez Correa, recae en el Juzgado Quinto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Medellín, por haber sido citada como acreedora hipotecaria dentro del proceso que actualmente tramita en ese despacho judicial bajo el radicado 050014003018201900012-00, por lo que se dispondrá la remisión de dicho asunto al mismo.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, LA SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN,

RESUELVE.

PRIMERO. SE DECLARA COMPETENTE al Juzgado Quinto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Medellín, para conocer de la demanda ejecutiva para la efectividad de la garantía real promovida por Ángela María Vélez Correa, en contra de Federman Guisao Sepúlveda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. SE ORDENA a la Secretaría que remita el presente asunto al citado despacho judicial, e informe lo acá decido al Juzgado Veintiocho Civil Municipal de Medellín.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MARIO GÓMEZ LONDOÑO', with a stylized flourish at the end.

MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO
Magistrado